

150/2022



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

Bogotá D.C., Agosto de 2022.

Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Capitolio Nacional
Ciudad

Asunto: Radicación Proyecto de Ley “Por medio de la cual se modifica el régimen de acceso y ascenso en la carrera administrativa, se crean los concursos independientes para personas con discapacidad, se establece la gratuidad de la inscripción para este segmento poblacional y se dictan otras disposiciones” o “Ley de concursos independientes para personas con discapacidad”

Respetado secretario,

Reciba un cordial saludo. De conformidad con lo estipulado en los artículos 139 y 140 de la Ley 5 de 1992 presento a consideración del Senado de la República el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se modifica el régimen de acceso y ascenso en la carrera administrativa, se crean los concursos independientes para personas con discapacidad, se establece la gratuidad de la inscripción para este segmento poblacional y se dictan otras disposiciones” o “Ley de concursos independientes para personas con discapacidad”, iniciativa legislativa que cumple las disposiciones correspondientes al orden en la redacción del proyecto consagradas en el artículo 145 de la citada ley. Agradezco surtir el trámite legislativo previsto en el artículo 144 de la Ley 5 de 1992.

De las Honorables y los Honorables Congresistas,


LAURA ESTER FORTICH SÁNCHEZ
Senadora de la República
Partido Liberal


Honorable Congressista

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

MANUEL VIRGÚEZ PIRAQUIVE
Senador de la República
Partido MIRA

CARLOS EDUARDO GUEVARA
Senador de la República
Partido MIRA

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO
Senador de la República
Partido Liberal

ANA PAOLA AGUDELO
Senadora de la República
Partido MIRA

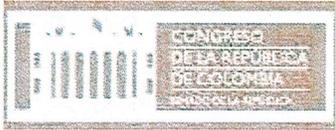
CESAR CRISTIAN GÓMEZ CASTRO.
Representante a la Cámara.

DOLCEY OSCAR TORRES ROMERO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

JUAN FELIPE LEMOS URIBE
Senador de la República
Partido de la U

NADIA BLEL SCAFF
Senadora de la República
Partido Conservador

*Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co*



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

IRMA LUZ HERRERA RODRIGUEZ
Representante a la Cámara por Bogotá
Partido Político MIRA

EFRAIN JOSÉ CEPEDA SARABIA
Honorable Senador de la República
Partido conservador Colombiano

SOLEDAD TAMAYO TAMAYO
Honorable Senadora de la República
Partido conservador Colombiano

Honorable Congressista

Honorable Congressista
Silvano CARRASQUILLA
RITE

Honorable Congressista

Honorable Congressista
PARTIDO COLOMBIA JUSTA
LIBRES
LORENA RÍOS COFRE

Honorable Congressista

Honorable Congressista

Honorable Congressista

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

PARTE DISPOSITIVA

PROYECTO DE LEY No 150 DE 2022.

“Por medio de la cual se modifica el régimen de acceso y ascenso en la carrera administrativa, se crean los concursos independientes para personas con discapacidad, se establece la gratuidad de la inscripción para este segmento poblacional y se dictan otras disposiciones” o

“Ley de concursos independientes para personas con discapacidad”

El Congreso de Colombia

DECRETA

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley modifica el régimen de acceso y ascenso en los concursos de carrera administrativa, se establecen medidas afirmativas para la provisión de puestos de trabajo por personas con discapacidad, se crean los concursos independientes para personas con discapacidad, se establece la gratuidad de la inscripción para concursos independientes de personas con discapacidad y se dictan otras disposiciones tendientes a garantizar la superación de circunstancias de desprotección y desigualdad de personas con discapacidad en el acceso al empleo público.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICABILIDAD. Esta ley será aplicable a los concursos de acceso y ascenso en la carrera administrativa, así como a las personas con discapacidad y compromete a las diferentes instituciones del Estado que participen en el proceso de provisión de cargos a través de concursos de méritos, en el establecimiento de diferentes medidas tendientes a garantizar condiciones realidades de igualdad frente al ejercicio del derecho de ingreso a la función pública.

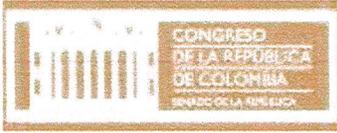
A los efectos de esta norma, se entiende por persona con discapacidad aquella que tenga reconocido un grado de discapacidad que altere la posibilidad de la persona de concursar en condiciones de igualdad frente a otros participantes

ARTÍCULO 3. Modifíquese el numeral 1 del artículo 2 de la ley 909 de 2004, el cual quedara así.

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, accesibilidad universal, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 27 de la ley 909 de 2004, el cual quedara así.

ARTÍCULO 27. CARRERA ADMINISTRATIVA. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

En todos los casos será admisible el establecimiento de medidas diferenciales tendientes a garantizar la superación de barreras de acceso a la carrera administrativa, en favor de personas con discapacidad.

ARTÍCULO 5. Modifíquese el artículo 28 de la ley 909 de 2004, el cual quedara así.

ARTÍCULO 28. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL INGRESO Y EL ASCENSO A LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos;

b. Accesibilidad universal y compensación de desventajas. El Estado garantizará el acceso y participación a personas con discapacidad en la administración pública en términos de igualdad real a las personas que por condiciones físicas o sociales deban afrontar mayores barreras de acceso y establecerá medidas diferenciales tendientes a garantizar la compensación de desventajas frente a otros participantes, para lo que se deberá reconocer las habilidades y potencialidades propias de cada una de ellas.

c) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole. En todos los casos será admisible el establecimiento de medidas diferenciales tendientes a garantizar la superación de barreras de acceso a la carrera administrativa, en favor de personas con discapacidad.

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

- d) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales;
- e) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección;
- f) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección;
- g) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de ejecutarlos;
- h) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera;
- i) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al perfil del empleo;
- j) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección.

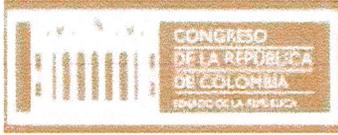
ARTÍCULO 6. Modifíquese el artículo 29 de la ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 de la ley 1960 de 2019, el cual quedara así.

ARTÍCULO 29. Concursos. La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos, y de ascenso, independientes abiertos e independientes para ascensos de personas con discapacidad, los cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función.

En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán participar las personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el desempeño de los empleos.

En los procesos de selección o concursos independientes de concurso abierto o independientes para ascensos de personas con discapacidad podrán participar las personas que acrediten una discapacidad y los requisitos para el desempeño del empleo público, como medida afirmativa para promover la participación de personas con discapacidad en el sector público.

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

El concurso de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos.

El concurso será de ascenso cuando:

1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, las plantas de personal del sector administrativo, o cuadro funcional de empleos, en los niveles asesor, profesional, técnico o asistencial.
2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los sistemas específicos o especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso.
3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso es igual o superior al número de empleos a proveer.

Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso el treinta por ciento (30%) de las vacantes a proveer. El setenta por ciento (70%) de las vacantes restantes se proveerán a través de concurso abierto de ingreso. En todos los casos se garantizará que el diez por ciento (10%) sobre los cargos a proveer a través de concursos de ascensos, como el diez por ciento (10%) de los cargos a proveer por vía de concursos abiertos, se solventarán a través de concurso independiente para personas con discapacidad.

Si en el desarrollo del concurso de ascenso o independiente de personas con discapacidad no se inscribe un número igual de servidores con derechos de carrera por empleo convocado, o personas con discapacidad, el concurso se declarará desierto y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso abierto. Quienes se hayan inscrito inicialmente para el concurso de ascenso o personas con discapacidad continuaran en el concurso abierto de ingresos sin requerir una nueva inscripción.

PARÁGRAFO 1. La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el procedimiento para que las entidades y organismos reporten la Oferta Pública de Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso e independiente para personas con discapacidad regulado en el presente artículo.

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

PARÁGRAFO 2. Para efectos de los concursos independientes para personas con discapacidad a que refiere el presente artículo, se garantizará que siquiera el treinta por ciento (30%) de los cargos ofertados, sean cerrados a personas con discapacidad intelectual o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

ARTÍCULO 7. EXENCIÓN EN EL PAGO DE TAZA POR CONCEPTO DE DERECHOS DE EXAMEN. Las personas con discapacidad objeto de la presente ley, estarán exentas del pago de las tasas derivadas de los exámenes tendientes a determinar la idoneidad personal para la provisión de las vacantes ofertadas en la convocatoria.

El Gobierno Nacional propenderá por la extensión universal de este beneficio a la totalidad de convocatorias que realice la Comisión Nacional del Servicio Civil.

ARTÍCULO 8. ACREDITACIÓN DE LA DISCAPACIDAD. La Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad del orden nacional por ella delegada, de conformidad con el artículo 7 de la ley 909 de 2004, determinará los requisitos de acreditación de la existencia de la discapacidad, así como de las particularidades de la misma.

ARTÍCULO 9. ADAPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. En la totalidad de convocatorias, orientadas a la provisión de cargos de carrera administrativa, se establecerán las adaptaciones y ajustes razonables que resulten necesarios, sin afectar el sentido de la prueba, tendientes a garantizar la igualdad real de oportunidades entre los concursantes, independiente a la existencia o ausencia de discapacidad.

ARTÍCULO 10. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente a la Ley 909 de 2004, a la ley 1960 de 2019 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De las Honorables y los Honorables Congresistas,


LAURA ESTER FORTICH SÁNCHEZ
Senadora de la República
Partido Liberal


Honorable Congresista
Claudia N. Pérez

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

MANUEL VIRGÚEZ PIRAQUIVÉ

Senador de la República
Partido MIRA

CARLOS EDUARDO GUEVARA

Senador de la República
Partido MIRA

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO

Senador de la República
Partido Liberal

ANA PAOLA AGUDELO
Senadora de la República
Partido MIRA

CESAR CRISTIAN GÓMEZ CASTRO.

Representante a la Cámara.

DOLCEY OSCAR TORRES ROMERO

Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

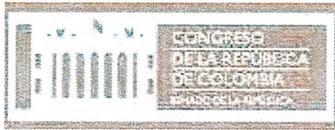
JUAN FELIPE LEMOS URIBE

Senador de la República
Partido de la U

NADIA BLEL SCAFF

Senadora de la República
Partido Conservador

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

IRMA LUZ HERRERA RODRÍGUEZ
Representante a la Cámara por Bogotá
Partido Político MIRA

EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA
Honorable Senador de la República
Partido conservador Colombiano

SOLEDAD TAMAYO TAMAYO
Honorable Senadora de la República
Partido conservador Colombiano

Honorable Congresista
CLAUDIA PÉREZ G.

Honorable Congresista

Honorable Congresista
SILVIO CARRASQUILLA RITE

Honorable Congresista

JOHN OTHO KUMANA

Honorable Congresista

LORENA RIOS C.
PARTIDO COLOMBIA JUSTA
LIQRES

Honorable Congresista

Honorable Congresista

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

PARTE MOTIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

PROYECTO DE LEY No _____ DE 2022.

“Por medio de la cual se modifica el régimen de acceso y ascenso en la carrera administrativa, se crean los concursos independientes para personas con discapacidad, se establece la gratuidad de la inscripción para este segmento poblacional y se dictan otras disposiciones” o “Ley de concursos independientes para personas con discapacidad”

1. OBJETO.

La iniciativa legislativa pretende modificar el régimen de acceso y ascenso en los concursos de carrera administrativa a través del establecimiento de medidas afirmativas para la provisión de puestos de trabajo por personas con discapacidad, las cuales contemplan la creación de concursos independientes para personas con discapacidad, sin limitar su participación en los concursos ordinarios de acceso o de ascenso; el establecimiento de la gratuidad de la inscripción para concursos independientes de personas con discapacidad y el reconocimiento expreso de la necesidad de establecer adaptaciones en las pruebas de acceso al empleo público; entre otras medidas tendientes a garantizar el acceso igualitario al empleo público y la garantía del mérito como elemento determinante a la administración pública.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.

El derecho de acceso al empleo público es una garantía constitucional de la que gozan la totalidad de los colombianos, la cual de conformidad con lo establecido por la misma carta constitucional debería garantizarse en condiciones igualitarias para todos los ciudadanos, no obstante el sistema jurídico actual requiere ajustes que permitan garantizar dicha igualdad real en el acceso a esta garantía a las personas con discapacidad al empleo público, a través del establecimiento de medidas diferenciales que reconozcan el mérito a pesar de las capacidades diferentes que puedan tener estas personas, a quienes en la actualidad se les exige adaptarse a un proceso ordinario que parte de una concepción plana del concepto de igualdad, que desconoce la existencia de barreras particulares en el acceso al empleo público por parte de personas con discapacidad.

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

En este sentido, se coloca a consideración de la corporación legislativa, la posibilidad de establecer un sistema que reconozca la necesidad de aplicar un sistema que garantice la igualdad entre iguales y establezca medidas tendientes a superar barreras de acceso frente a personas que no se encuentran en condiciones de igualdad frente a otras, con razón a una discapacidad que les ha dotado de capacidades diferentes a las que podrían ser evaluadas en un proceso de convocatoria ordinaria. Es importante resaltar que con la iniciativa legislativa se pretende dar una materialización real al mérito como punto central de la provisión de un cargo a través del régimen de carrera, entendiendo que la existencia de una discapacidad y el desarrollo de unas habilidades diferentes no puede ser interpretado como ausencia de mérito que justifique su acceso a la administración pública.

3. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO DE LEY.

3.1. La garantía de especial protección constitucional a personas con discapacidad, el modelo social de discapacidad, el Estado como garante de la protección de sus derechos y la responsabilidad del legislador en la adopción de medidas afirmativas que garanticen una igualdad real en el acceso al empleo público.

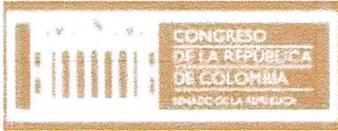
3.1.1. El establecimiento de medidas diferenciales en favor de personas con discapacidad como mecanismo efectivo de dar cumplimiento a la garantía de respeto pleno por sus derechos fundamentales y el deber de protección del Estado frente a este importante segmento poblacional.

El establecimiento de medidas diferenciales en favor de personas con discapacidad posee fundamentos tanto de índole constitucional, entre otros en los artículos 13, 47, 54 y 68 superiores. como de índole convencional, igualmente superiores a los del artículo 93 constitucional al hacer parte del denominado bloque de constitucionalidad, de nuestro ordenamiento jurídico.

Encontramos importantes fundamentos en el área del derecho convencional frente a este importante segmento poblacional, dentro de los que podemos resaltar la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 762 de 2002 así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009.

Esta especial protección constitucional compromete al Estado en la adopción de medidas afirmativas en favor de este segmento poblacional, responsabilidad que de igual forma le es aplicable al legislador, como actor fundamental en la conformación del ordenamiento jurídico aplicable en el territorio nacional. Al respecto, la Corte Constitucional, recuerda haciendo mención de las personas con discapacidad que

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

“La Constitución fija unos deberes precisos para el Estado, de adelantar acciones afirmativas en favor de todas aquellas personas que se encuentran en las mencionadas circunstancias, a quienes debe garantizar no solo las condiciones para equilibrar su desventaja fáctica sino, sobre todo, a fin de lograr su integración real a la sociedad. Si el Estado omite diferenciar positivamente en los eventos de personas en situación de discapacidad permite que la condición natural de desigualdad y desprotección en que se hallan se mantenga y les impide participar e integrarse socialmente, ejercer plenamente sus prerrogativas y asumir sus obligaciones; en otros términos, vulnera sus derechos fundamentales.” (Subrayado fuero del texto).¹

Frente a la misma temática, la Honorable Corte Constitucional indicó que

“Nuestra Carta Política enfatiza el amparo reforzado que deben gozar las personas con discapacidad en varios de sus artículos. Así, el artículo 13 de la Carta, establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan,” norma de la que se deriva directamente una obligación de contenido positivo en cabeza de las autoridades, consistente en adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr una igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades entre los asociados, no simplemente en términos formales o jurídicos. El artículo 47 Superior, señala la obligación del Estado de adelantar “política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.” El artículo 54 de la Carta dispone que es “obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.” El artículo 68 de la Carta instituye como obligaciones especiales del Estado la “erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales”.

Si bien es cierto la terminología utilizada en estos los artículos 47, 54 y 68 Superiores no fue homogénea ni plenamente consistente con las definiciones técnicas de los términos aplicables a las personas con discapacidad, estas disposiciones resaltan, tal como lo ha señalado la Corte en anteriores oportunidades, la voluntad inequívoca del constituyente de “eliminar, mediante actuaciones positivas del Estado y de la sociedad, la silenciosa y sutil marginación de las personas con cualquier tipo de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo más profundo de las estructuras sociales, culturales y económicas predominantes en nuestro país, y es

¹en Sentencia T-097 de 2016



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

fundamentalmente contraria al principio de dignidad humana sobre el que se construye el Estado Social de Derecho”²

3.1.2. El legislador como garante de la promoción de derechos y especial protección a personas con discapacidad.

Preceptos que establecen, entre otras obligaciones de hacer en el legislador, tal y como lo indico la misma corte constitucional, en este sentido el alto tribunal constitucional indicó que,

*“Este deber específico de protección se traduce en una “obligación de hacer” concreta a cargo del legislador consistente en incluir tales sujetos, así como aquellas personas que por su condición (...) física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, en los supuestos de hecho de las normas que reconozcan o concedan derechos, beneficios, ventajas u oportunidades a favor de sujetos en atención a sus condiciones físicas especiales o a las barreras que estos sujetos experimentan y que impiden su participación en la sociedad o el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad”.*³

En el mismo sentido, continúa el Alto Tribunal Constitucional por determinar de manera específica el alcance del mandato constitucional frente al legislador a la luz del derecho a la igualdad, indicando que,

*“A la luz de los incisos 2 y 3 del artículo 13 Superior, “el legislador debe promover y proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad y, por tanto, debe (i) procurar su igualdad de derechos y oportunidades frente a los demás miembros de la sociedad, (ii) adelantar las políticas pertinentes para lograr su (...) integración social de acuerdo a sus condiciones y (iii) otorgarles un trato especial, pues la no aplicación de la diferenciación positiva contribuye a perpetuar la marginación o la discriminación”*⁴

Deber de protección que en concepto del Alto Tribunal Constitucional

“se traduce en una “obligación de hacer” concreta a cargo del legislador consistente en incluir tales sujetos, así como aquellas personas que por su condición (...) física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, en los supuestos de hecho de las normas que reconozcan o concedan derechos, beneficios, ventajas u oportunidades a favor

² Sentencia C-804 del once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009), Corte Constitucional, Magistrada Ponente Doctora María Victoria Calle Correa, disponible en Sitio Web <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-804-09.htm>

³ Sentencia C-329 del veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019), Corte Constitucional, Magistrado Ponente, Doctor Carlos Bernal Pulido, disponible en Sitio Web <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-329-19.htm>

⁴ Sentencia C-329 del veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019), Corte Constitucional, Magistrado Ponente, Doctor Carlos Bernal Pulido, disponible en Sitio Web <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-329-19.htm>



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

de sujetos en atención a sus condiciones físicas especiales o a las barreras que estos sujetos experimentan y que impiden su participación en la sociedad o el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad”.

En este sentido, con la incorporación de las medidas planteadas se está cumpliendo con la responsabilidad legislativa, planteada por la Carta Superior, y contribuyendo al fortalecimiento de la especial protección constitucional de niños con discapacidad.

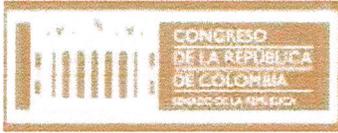
3.1.3. El modelo social de la discapacidad, un cambio de visión ante la discapacidad que exige de una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico.

El cambio de perspectiva en la comprensión de la discapacidad implica un avance significativo en materia de garantía de respeto por derechos fundamentales de personas con discapacidad al interior del territorio nacional, evolución descrita por (Palacios., 2008) y reconocida por la Honorable Corte Constitucional en repetidas oportunidades⁵, cambio de perspectiva descrito por este Alto Tribunal Constitucional, referenciando a (Palacios., 2008) describiendo que

“La discapacidad ha sido comprendida desde distintas perspectivas a lo largo de la historia. Existe una primera etapa en la que esta población era marginada de la sociedad en general por considerar su impedimento como una imposibilidad para aportar a los intereses de la comunidad. Este es el modelo de prescindencia, el cual asociaba la discapacidad a creencias religiosas o espirituales y consideraba que esta población no era “normal” y se decidía apartarla. Posteriormente, el modelo médico-rehabilitador reconsideró la percepción de la discapacidad y aceptó que las personas con discapacidad podían contribuir a la sociedad. Las causas de la discapacidad ya no eran religiosas, sino científicas y podían ser tratadas a través de procedimientos médicos. Este modelo reconoció derechos a las personas con discapacidad, pero a través del lente del diagnóstico médico y su posible rehabilitación.

Finalmente, la perspectiva actual y vigente, comprende la discapacidad desde el modelo social, el cual sostiene que el origen de la discapacidad no atiende a factores religiosos o médicos, sino sociales. En otras palabras, comprende que la discapacidad no es del sujeto sino que surge de las barreras externas asociadas a la comunidad en general. Parte del reconocimiento de goce y ejercicio de los derechos humanos a favor de todas las personas con discapacidad. Los principios esenciales del modelo social de discapacidad son la autonomía e independencia, la dignidad

⁵ Entre otras en la Sentencia C.025 del cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), Corte Constitucional, Magistrada Sustanciadora Dra. Cristina Pardo Schlesinger, disponible en Sitio Web <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-025-21.htm>



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

humana, la igualdad, la inclusión, la accesibilidad universal, entre otros. Sobre este nuevo paradigma la doctrina sostiene que parte de dos presupuestos: (i) las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad. Esto se fundamenta en el principio de la dignidad humana que comprende al ser humano como un fin y no como un medio; y (ii) la discapacidad es generada por factores sociales y estructurales que deben ser modificados para garantizar que esta población goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Sobre este segundo presupuesto, se ha señalado que “no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad, para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social”.

En el mismo sentido (Morales., 2021) recuerda como, la estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud no es un tema nuevo en Colombia, resaltando que

“A lo largo de la historia, ha existido cuatro modelos de atención a la discapacidad: (i) el de la prescindencia, según el cual una persona con discapacidad no tiene nada que aportarle a la sociedad; (ii) el de la marginación, para el cual son “anormales” y, por ello, deben estar segregadas todas las personas que tienen alguna situación de incapacidad; (iii) el modelo médico o rehabilitador, cuya premisa es que cualquier persona con condición de discapacidad debe curarse, con el fin de que pueda ser parte activa de la sociedad, y (iv) el modelo social. Nace a finales de los años noventa y entiende que el contexto socio-ambiental, capaz de influir en una persona con discapacidad, es protagonista en estas circunstancias. Deja de lado la atención en el individuo, para enfocarse en las barreras que el entorno le impone y el rol principal de la sociedad en su manejo y atención. “

Este modelo se integra a nuestro ordenamiento jurídico con la incorporación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la ley 1346 de 2009, entrando materialmente en vigor en 10 de junio de 2011, dejando atrás el modelo médico o rehabilitador acogido en la ley 361 de 1997. En el mismo sentido (Morales., 2021) resalta que:

“Bajo el modelo social, son el Estado y la sociedad (y no el individuo) los obligados a desarrollar un entorno en el que no existan barreras que perpetúen la diferencia de acceso a los derechos que genera la discapacidad. Es así como la Ley 1246 del 2009 tiene por objeto “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, y eliminando toda forma de discriminación por razón de la discapacidad”.

*Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co*



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

El modelo social hace una distinción clara entre los conceptos de deficiencia y discapacidad. La discapacidad es un estado que evoluciona a lo largo del tiempo. Es la consecuencia de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras que estas deben enfrentar, cuando su entorno les impide una participación igualitaria, plena y efectiva en la sociedad. A la luz del modelo social, puede ocurrir, entonces, que un empleado con imposibilidad en la movilidad de sus piernas no esté en condición de discapacidad para desempeñarse en labores como ingeniero de sistemas, por ejemplo. La deficiencia en sus piernas no le impide desarrollarse en su campo profesional. Calificar una incapacidad total y conjunta por deficiencia en solo algunos órganos, que no necesariamente obstaculizan el desarrollo de la labor profesional, sería ir en contravía de las disposiciones del modelo social de discapacidad.”

Este cambio de visión frente a la concepción de la discapacidad exige de la adecuación del ordenamiento jurídico a las realidades que estos cambios implican; para el presente caso, en los mecanismos de acceso a la función pública, permitiendo la participación efectiva de las personas con discapacidad en la carrera administrativa, garantías que les permitirán cumplir con la visión de un modelo que enfoca sus esfuerzos en la eliminación de las barreras históricas y sociales que limitan el desarrollo de las personas con discapacidad y en consecuencia su ingreso como servidores del Estado.

En este sentido, con esta propuesta legislativa, se somete a consideración del Congreso de la República una visión que busca garantizar la integración real de las personas con discapacidad en la carrera administrativa, a través del Establecimiento de medidas que buscan superar las barreras sociales que debe afrontar este segmento poblacional, el cual limita de manera clara la igualdad material de oportunidades en el acceso a la función pública.

3.2. La discapacidad en Colombia y su participación en el ejercicio de la Función Pública vía Carrera Administrativa.

3.2.1. Personas con discapacidad en Colombia y clasificación de las mismas de acuerdo con el tipo de discapacidad.

El día 11 de julio de 2022, en respuesta a solicitud de información presentada desde la Unidad de Trabajo Legislativo y por instrucciones de la Senadora Laura Ester Fortich Sánchez, ante el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, petición identificada bajo radicado 20223130127642T, proporcionando respuesta al interrogante relacionado con cifras asociadas al número de personas con discapacidad que habitan en el país, así como los tipos de discapacidad que posee este importante segmento poblacional indicó que,

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

Para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV 2018, en relación con la medición de la discapacidad, el DANE tomó en cuenta las orientaciones planteadas por el Grupo de Washington¹ (en adelante, WG por sus siglas en inglés) a partir de los lineamientos conceptuales de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud-CIF, desde la perspectiva biopsicosocial de la discapacidad, entendida como una interacción dinámica entre los estados de salud y los factores contextuales (factores ambientales y personales).

En ese sentido, el DANE indaga por la discapacidad a partir del enfoque de las limitaciones o dificultades que una persona puede tener para realizar actividades básicas diarias como: oír, hablar, ver, mover el cuerpo, caminar; agarrar o mover objetos con las manos, entender, aprender o recordar; comer, vestirse o bañarse por sí mismo; relacionarse o interactuar con las demás personas y hacer las actividades diarias sin presentar problemas cardíacos o respiratorios. Lo anterior, de acuerdo con los niveles de severidad propuestos en la escala de medición del WG que permite identificar el grado de severidad de la dificultad reportada. Cabe destacar que la pregunta es autodeclarativa, es decir, la persona reporta la información de acuerdo con sus propias consideraciones u observaciones de sus capacidades y su impacto en su participación en actividades de la vida diaria. La pregunta también tiene opción múltiple de respuesta.

Adicionalmente, indaga sobre la causa de la limitación principal y el mecanismo de ayuda utilizado para la misma.

De acuerdo con lo anterior, y en aras de lograr una mejor interpretación en la información, presentamos los niveles de severidad utilizados en el CNPV 2018 con su respectiva conceptualización:

- 1. **Nivel 1. No puede hacerlo:** La persona se encuentra en situación de discapacidad total, sus condiciones le impiden llevar a cabo la actividad, por lo general requiere de ayudas y de apoyo de terceros, presentando un alto grado de dependencia.*
- 2. **Nivel 2. Sí, con mucha dificultad:** La persona presenta una grave disminución en su capacidad para realizar la actividad, por lo general requiere de ayudas y de apoyo de terceros, muestra un alto grado de dependencia.*
- 3. **Nivel 3. Sí, con alguna dificultad (poca-escasa-leve):** La persona encuentra dificultades para realizar la actividad, sin embargo, puede realizarla por sí misma, es independiente y en algunos casos puede requerir de ayuda y/o apoyo de terceros.*
- 4. **Nivel 4. Sin dificultad:** La persona no presenta ningún tipo de limitación que afecte su desempeño.*

Se consideran personas con discapacidad a quienes reporten los niveles de severidad 1 o 2 en alguna de las actividades. Por lo anterior, se ha dispuesto un archivo en Excel denominado “CONDICIÓN_FÍSICA_MUNICIPIOS_CNPV_2018.xlsx”, donde podrá consultar la población

*Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co*

censada en hogares particulares, por limitaciones permanentes y grados de dificultad, según municipio, área (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso), sexo y grupos de edad.

Además, en el siguiente enlace puede encontrar la Nota Estadística Estado Actual de la medición de discapacidad en Colombia, en donde encuentra una descripción completa del panorama estadístico de la discapacidad, en donde se deja claro que además de la información del Censo, ay otras fuentes de información de información estadística sobre este tema: <https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/serie-notas-estadisticas> . Adicionalmente, a continuación, se presenta una tabla con los datos más actualizados disponibles, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2021, en donde se observa que se estiman 2,8 millones de personas con discapacidad y que Las actividades que generan mayor dificultad a las personas con discapacidad son ver de cerca, de lejos o alrededor (54,1%) y mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras (32,2%).

Tabla 1. Personas con discapacidad de 5 años o más, según sexo y actividades que les generan dificultad (cifras en miles y porcentajes). Total nacional. 2021.

Actividades que generan dificultad	Personas con discapacidad							
	Total nacional		Hombres			Mujeres		
	Cantidad en miles	Distribución (%)	Cantidad en miles	Distribución (%)	Participación (%)	Cantidad en miles	Distribución (%)	Participación (%)
Total	2.873	-	1.296	-	45,1	1.577	-	54,9
Oír la voz o los sonidos	450	15,7	228	17,6	50,6	222	14,1	49,4
Hablar o conversar	342	11,9	193	14,9	56,4	149	9,4	43,6
Ver de cerca, de lejos o alrededor	1.553	54,1	622	48,0	40,0	931	59,1	60,0
Mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras	983	34,2	435	33,5	44,2	549	34,8	55,8
Agarrar o mover objetos con las manos	407	14,2	186	14,4	45,8	221	14,0	54,2
Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo(a)	443	15,4	237	18,3	53,6	205	13,0	46,4
Comer, vestirse o bañarse por sí mismo(a)	338	11,8	157	12,1	46,5	181	11,5	53,5
Relacionarse o interactuar con las demás personas	298	10,4	181	13,9	60,6	118	7,5	39,4



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

Notas: -Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
-Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
Fuente: DANE, ECV 2021

3.2.2. Personas con discapacidad intelectual que habitan en el territorio nacional.

En relación con este numeral, es pertinente precisar que el set de preguntas del Grupo de Washington para la medición de la discapacidad no considera la medición de una tipología de “discapacidad intelectual”. Por lo tanto, desde el DANE, en línea con las recomendaciones de esta autoridad internacional para oficinas estadísticas y de acuerdo con el trabajo realizado en el marco de la inclusión de esta medición en el censo de 2018, que involucró trabajo con organizaciones de sociedad civil y entidades competentes del gobierno nacional, no se cuenta con una medición para dicha denominación.

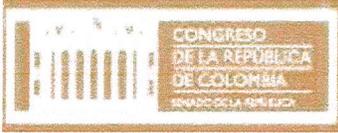
Sin embargo, en el marco de su pregunta, puede resultar relevante la información correspondiente a la categoría “Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo(a)” presentada en la respuesta al numeral anterior, por lo cual se invita a consultarla en la Tabla 1.

3.2.3. Participación de personas con discapacidad en la Función Pública y la Carrera Administrativa.

Mediante oficio de fecha 07 de julio de 2022 el departamento administrativo de la función pública dio respuesta oportuna a una solicitud de información formulada desde la Unidad de Trabajo Legislativo de la Senadora Laura Ester Fortich Sánchez; a la pregunta formulada en la que se solicitaba información en relación con el número de personas con discapacidad que actualmente se encuentran ocupando un cargo de carrera administrativa y su equivalencia porcentual de este número frente a la totalidad de cargos de carrera administrativa existentes, el Departamento Administrativo en mención respondió que,

*“Una vez consultado el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP y fuentes externas con corte a febrero de 2022, donde se indican 10.915 personas con discapacidad (PcD), de las cuales 8.611 son servidores públicos y 2.304 son contratistas de prestación de servicios. De los 8.611 servidores públicos, **4.146 servidores públicos con discapacidad se encuentran ocupando cargos de carrera administrativa en la administración pública**. Sin embargo, respecto a su solicitud, de remitir el porcentaje de equivalencia de este número de servidores frente a la totalidad de cargos de carrera administrativa, es preciso indicar que, si bien este Departamento Administrativo administra el SIGEP, son las entidades públicas las obligadas a operar, registrar, actualizar y gestionar la información en el sistema. Por esta razón, el DAFP no tiene la capacidad para determinar*

*Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co*



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

el porcentaje de equivalencia de este número de servidores frente a la totalidad de cargos de carrera administrativa.” (Subrayada y resaltado fuera del texto).

Frente a la pregunta relacionada con el número de personas con discapacidad intelectual que actualmente se encuentran ocupando un cargo de carrera administrativa y su equivalencia porcentual sobre la totalidad de personas que en la actualidad ocupan cargos de carrera administrativa, el Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que,

“ Una vez consultado el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP y fuentes externas con corte a febrero de 2022, de los 8.611 servidores públicos con discapacidad, se encuentran 50 servidores públicos con discapacidad intelectual, de los cuales 28 se encuentran ocupando cargos de carrera administrativa en la administración pública. Sin embargo, respecto a su solicitud, de remitir el porcentaje de equivalencia de este número de servidores frente a la totalidad de cargos de carrera administrativa, es preciso indicar que, si bien este Departamento Administrativo administra el SIGEP, son las entidades públicas las obligadas a operar, registrar, actualizar y gestionar la información en el sistema. Por esta razón, el DAFP no tiene la capacidad para determinar el porcentaje de equivalencia de este número de servidores frente a la totalidad de cargos de carrera administrativa” (Subrayada y resaltado fuera del texto).

3.2.4. Medidas tendientes a promover la vinculación de personas con discapacidad en la Función Pública

De acuerdo con la respuesta dada por el Departamento administrativo de la Función Pública, referido en el numeral 3.6 de esta ponencia,

“Con el fin de promover la vinculación de personas con discapacidad, el Gobierno nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 2011 de 2017, “Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público”, compilado en el Decreto 1083 de 2015, el cual señala:

*“Artículo 2.2.12.2.3 **Porcentaje de vinculación** de personas con discapacidad en el sector público. El Estado, a través de todos los órganos, organismos y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes, para promover el acceso al empleo público de las personas con*

*Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co*

discapacidad deberán vincular como mínimo el porcentaje que este Capítulo establece de acuerdo con las siguientes reglas:

Se establecerá un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con discapacidad de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública. El cálculo de este porcentaje se establecerá de acuerdo al tamaño total de la planta (obtenida de la sumatoria de la planta permanente integrada por empleos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de periodo u otros que determine la ley, temporal, trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) de las entidades, de la siguiente forma:

Tamaño de la planta	Porcentaje de la planta con participación de personas con discapacidad	Porcentaje de la planta con participación de personas con discapacidad	Porcentaje de la planta con participación de personas con discapacidad
	Al 31 de diciembre de 2019	Al 31 de diciembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2021
1. Plantas entre 1 y 1000 empleos	2%	3%	4%
2. Plantas entre 1001 y 3000 empleos	1%	2%	3%
3. Plantas mayores a 3001 empleos	0,50%	1%	2%

En consecuencia, esta disposición busca generar espacios de inclusión laboral en el empleo público a la población con discapacidad bajo los principios de inclusión, equidad y responsabilidad social, buscando garantizar el acceso en igualdad de condiciones y la equiparación de oportunidades. Así las cosas, es preciso indicar que las entidades deberán reportar a este Departamento Administrativo en el primer bimestre de cada año a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP, el cumplimiento del porcentaje de vinculación de servidores públicos con discapacidad.

Igualmente, desde Función Pública se ha venido promoviendo y acompañando a las entidades públicas en la implementación del uso de alternativas y programas como el teletrabajo y horarios flexibles, que permiten flexibilizar el empleo público y brindar herramientas a las entidades en su alistamiento para la vinculación de las personas con discapacidad y los ajustes razonables que se



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

requieren para la inclusión de esta población.

Adicionalmente, se viene trabajando en la elaboración del Programa de Inclusión Laboral para las Personas con Discapacidad, en el cual se encuentra la "Ruta de Empleabilidad de las personas con discapacidad", por medio de la cual se puede llevar a cabo con éxito la vinculación de una persona con discapacidad a una entidad pública, lo cual se puede ver reflejado en la siguiente imagen."

3.2.5. Medidas tendientes a garantizar el acceso igualitario a la carrera administrativa por parte de personas con discapacidad.

Mediante oficio de fecha 05 de julio de 2022 la Comisión Nacional del Servicio Civil dio respuesta oportuna a una solicitud de información formulada desde la Unidad de Trabajo Legislativo de la Senadora Laura Ester Fortich Sánchez; a las diferentes preguntas formuladas en la que se solicitaba información en relación con las garantías de acceso igualitario a la carrera administrativa por parte de personas con discapacidad indicó que;

"En primer lugar, se debe indicar que la Ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, busca garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación a las personas por razón de su discapacidad, para garantizar así los derechos, beneficios y obligaciones laborales de las personas con discapacidad.

Frente a lo contemplado por la ley específicamente con relación a los ajustes razonables, se precisa que corresponden a aquellas modificaciones y adaptaciones (ajustes) necesarias y adecuadas (razonables) requeridas para garantizar a la persona con discapacidad física, sensorial, mental y/o intelectual el pleno ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.

Es así como, en esta línea, la CNSC ha venido implementando ajustes razonables, para garantizar así los derechos, beneficios y obligaciones laborales de las personas con discapacidad, y para ello ha implementado algunas estrategias como:

- 1. Comunicación de la información: En esta estrategia se ha buscado incorporar un lenguaje inclusivo e incorporar estándares de usabilidad y accesibilidad para hacer más fácil la*

*Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co*



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

navegación por todos los contenidos del portal y para ello se cuenta con dos canales de comunicación (lenguaje de señas y closed caption) y con estrategias pedagógicas claras con explicaciones concretas y tutoriales, para que las personas en situación de discapacidad puedan conocer los procesos de selección que adelanta la CNSC. Adicional a ello, al interior de la CNSC se ha venido capacitando sobre el uso de lenguaje claro para la producción de contenidos más entendibles para los ciudadanos.

2. Escuela Virtual de la CNSC: la Comisión ha puesto a disposición de las entidades públicas y de la ciudadanía en general a la escuela como mecanismo de transferencia de conocimiento, en la cual se cuenta con tres canales de comunicación (audio, video y texto), que permite el pleno ejercicio formativo a las personas en igualdad de condiciones. De igual modo, se resalta que todos los cursos cuentan con un diseño pedagógico, que asegura el reconocimiento de los estilos de aprendizaje.

La Escuela cuenta con una mesa de trabajo de inclusión, en la cual se discuten y analizan las estrategias diferenciales para las personas en situación de discapacidad y como estrategia de accesibilidad en condición de inclusión.

Así mismo, en los casos de ingreso y ascenso en la carrera administrativa o en cualquiera de los sistemas especiales de carrera de la administración pública en los que la selección se realice mediante concurso de méritos, el aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas previstas en el proceso de selección y acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar, y así mismo analizar el tipo de apoyo que necesite el aspirante para garantizar el acceso en igualdad de condiciones y la equiparación de oportunidades.

De otra parte, es pertinente indicar lo que establece el Decreto 1083 de 2015, frente al beneficio de los elegibles que se encuentren en situación de discapacidad:

“ARTÍCULO 2.2.6.20 Lista de elegibles. Dentro de un término no superior a cinco (5) meses contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, con base en los resultados del concurso y en riguroso orden de mérito, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad que adelantó el concurso de acuerdo con la respectiva delegación, elaborará la lista de elegibles para los empleos objeto del concurso.

*Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co*



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

La lista deberá ser divulgada a través de las páginas web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la entidad para la cual se realizó el concurso y de la entidad que lo realizó, así como en sitios de acceso al público de estas últimas entidades.

Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles. Si esta situación se presenta en el primer lugar el nombramiento recaerá en la persona que se encuentre en situación de discapacidad; de persistir el empate, éste se dirimirá con quien se encuentre inscrito en el Registro Público de Carrera, de continuar dicha situación se solucionará con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2º numeral 3 de la Ley 403 de 1997.” (Subrayado fuera de texto)

Sobre el particular, la CNSC en el Acuerdo No. 20201000001656 “Por el cual se reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas Específicos y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique”, determina:

“ARTÍCULO 11º. Desempate de elegibles. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la lista de elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados; en estos casos para determinar quién debe ser nombrado en período de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden.

- 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.*
- 2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa.*
- 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011.*
- 4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997.*
- 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o los centros de conciliación públicos o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010.*
- 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias funcionales*

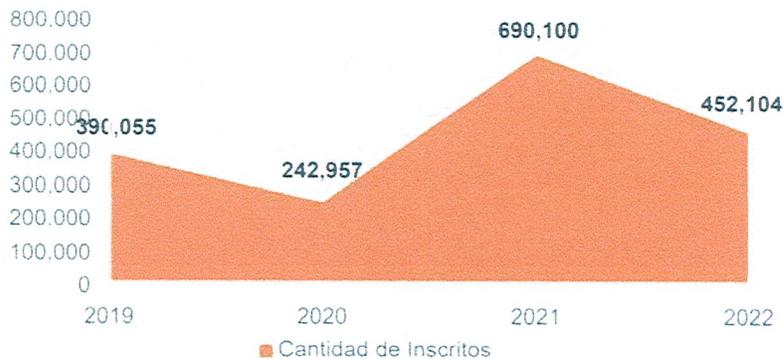
*Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co*

7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes.
8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales.
9. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones.
10. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la citación de los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia.” (Subrayado fuera de texto)

Finalmente, con relación al número porcentual de personas con discapacidad y específicamente de personas con discapacidad intelectual que acceden a un cargo vía carrera administrativa, a continuación, se presenta el comportamiento de las inscripciones para los 24 procesos de selección adelantados del periodo 2019 al 2022, así como los inscritos con alguna discapacidad reportada y el número de inscritos con alguna discapacidad que presentaron pruebas:

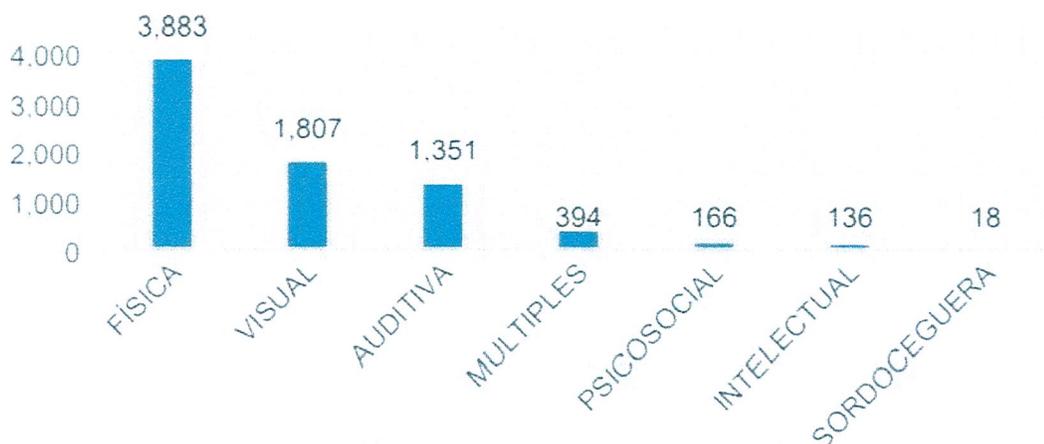
DATOS SOBRE INSCRIPCIONES A PROCESOS DE SELECCIÓN 2019 a 2022

Comportamiento Inscripciones por año



Fuente: Histórico Procesos de selección SIMO

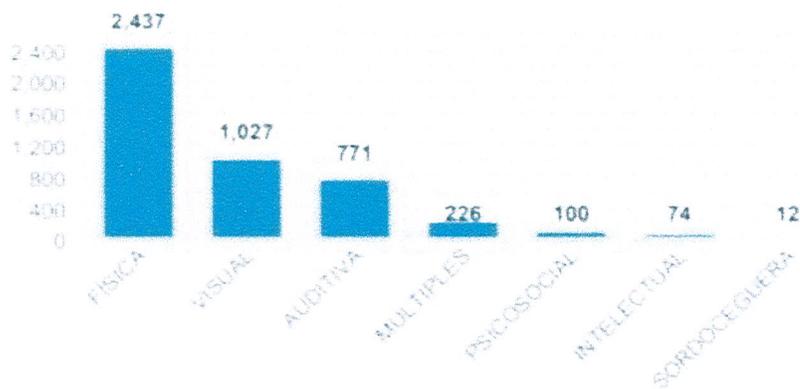
Inscritos por discapacidad reportada



Fuente: Histórico Procesos de selección SIMO

DATOS SOBRE PRUEBAS A PROCESOS DE SELECCIÓN 2019 a 2022*

Inscritos con discapacidad que aplicaron pruebas



Fuente: Histórico Procesos de selección SIMO

*Aquí se muestra el comportamiento de los inscritos en las pruebas para 18 PS, los demás PS aún no ha llegado a esta etapa.

En conclusión, del total de personas inscritas en dicho periodo que corresponden a 1.775.215 aspirantes, se inscribieron un total de 7.755 con alguna discapacidad reportada y de esta cantidad 136 personas con discapacidad intelectual que corresponde al 0,0077% del total de inscritos.

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

Así mismo, a la fecha, teniendo en cuenta los procesos de selección en los cuales ya se ha surtido la etapa de pruebas, de las 136 personas 74 personas han presentado pruebas y de estas se encuentran en listas de elegibles 8 aspirantes a la fecha, que corresponden al 10,8% del total de personas con discapacidad intelectual que han presentado pruebas.

Ahora bien, es pertinente indicar que, de los 8 aspirantes, dos (2) de ellos se encuentran inscritos en el Registro Público de Carrera Administrativa.

En este sentido, se atiende su petición, no sin antes precisar que la dirección electrónica a la cual se dirige la presente respuesta, coincide plenamente con la suministrada en su escrito.”

3.3. Algunas experiencias internacionales.

A nivel internacional existen experiencias de establecimiento de medidas diferenciales en favor de personas con discapacidad en el acceso al empleo público, dentro de los que podemos resaltar los ordenamientos jurídicos de.

3.3.1. ESPAÑA.

Esta legislación establece un sistema que permite realizar una reserva de cargos en los concursos públicos de empleo en favor de personas con discapacidad. Al respecto, a través de la ley 53 de 2003, modificó la ley 30 de 1984 estableciendo en un artículo único la garantía de reserva de cupos en favor de las personas con discapacidad, en un porcentaje no menor al cinco por ciento (5%) de la convocatoria, medida que fue desarrollada vía Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre de 2004, en las que se establece la posibilidad de realizar convocatorias de turno independientes cuando resultase necesario o la aplicación de convocatorias ordinarias con reservas de plazas en favor de este segmento poblacional.

En el mismo decreto se establecen otras disposiciones relacionadas con el concepto de personas con discapacidad para efectos de la adecuada interpretación de la norma; así como reglas de aplicabilidad de las disposiciones diferenciales planteada por la ley, incluyendo la gratuidad del proceso para las personas con discapacidad objeto de la mencionada norma.

3.3.2. COSTA RICA.

En el caso de Costa Rica, se incorporó al ordenamiento jurídico la “*Ley de Inclusión y Protección Laboral de las personas con discapacidad en el Sector Público*”, la cual en su artículo primero estableció que “*En las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará cuando menos un porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con*

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



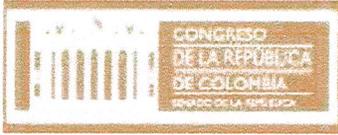
Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de cada uno de esos Poderes.”

4. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p><i>“Por medio de la cual se modifica el régimen de acceso y ascenso en la carrera administrativa, se crean los concursos independientes para personas con discapacidad, se establece la gratuidad de la inscripción para este segmento poblacional y se dictan otras disposiciones” o “Ley de concursos independientes para personas con discapacidad”</i></p>	<p>Se enuncia el proyecto de ley realizando una descripción general del contenido de este, sus efectos, así como su marco de aplicabilidad.</p>
<p>ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley modifica el régimen de acceso y ascenso en los concursos de carrera administrativa, se establecen medidas afirmativas para la provisión de puestos de trabajo por personas con discapacidad, se crean los concursos independientes para personas con discapacidad, se establece la gratuidad de la inscripción para concursos independientes de personas con discapacidad y se dictan otras disposiciones tendientes a garantizar la superación de circunstancias de desprotección y desigualdad de personas con discapacidad en el acceso al empleo público.</p>	<p>En el mencionado artículo se relaciona de manera general lo que se pretende materializar con la incorporación de la iniciativa legislativa al ordenamiento jurídico colombiano. Medidas que deberían reflejarse en un aumento significativo de presencia de personas con discapacidad en la carrera administrativa; así como en el establecimiento de un concurso que parta del reconocimiento de sus capacidades, reconociendo sus méritos de una forma adecuada, con las capacidades propias de cada una de las</p>

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez

H. Senadora

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
	personas que hacen parte de este segmento poblacional.
<p>ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICABILIDAD. Esta ley será aplicable a los concursos de acceso y ascenso en la carrera administrativa, así como a las personas con discapacidad y compromete a las diferentes instituciones del Estado que participen en el proceso de provisión de cargos a través de concursos de méritos, en el establecimiento de diferentes medidas tendientes a garantizar condiciones realidades de igualdad frente al ejercicio del derecho de ingreso a la función pública.</p> <p>A los efectos de esta norma, se entiende por persona con discapacidad aquella que tenga reconocido un grado de discapacidad que altere la posibilidad de la persona de concursar en condiciones de igualdad frente a otros participantes.</p>	Se establece el marco de aplicabilidad de la norma, dando claridad frente a los principales beneficiarios de la norma, así como determinando el compromiso Estatal frente al segmento poblacional de personas con discapacidad en la garantía de respeto por sus derechos, fortaleciendo a su vez el cumplimiento de los principios constitucionales y legales en materia de acceso al empleo público, vía carrera administrativa.



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

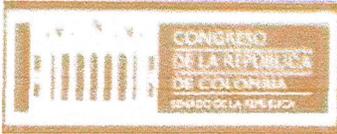
PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p>ARTÍCULO 3. Modifíquese el numeral 1 del artículo 2 de la ley 909 de 2004, el cual quedara así.</p> <p>ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.</p> <p>1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, <u>accesibilidad universal</u>, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.</p>	<p>Con este artículo se incorpora de manera taxativa el principio superior de accesibilidad universal, dentro de los principios de la función pública, dando claridad frente a la necesidad de propender por una función pública incluyente, que reconozca y propenda por el acceso real a la totalidad de la población colombiana, de la que naturalmente hace parte el segmento poblacional de personas con discapacidad.</p>
<p>ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 27 de la ley 909 de 2004, el cual quedara así.</p> <p>ARTÍCULO 27. CARRERA ADMINISTRATIVA. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.</p>	<p>Se incorpora al artículo en mención la claridad que la prohibición de discriminación acertadamente incorporada en la norma no excluye la posibilidad de incorporar medidas diferenciales en favor de personas con discapacidad que pretenden acceder al empleo público, vía carrera administrativa.</p>

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p><u>En todos los casos será admisible el establecimiento de medidas diferenciales tendientes a garantizar la superación de barreras de acceso a la carrera administrativa, en favor de personas con discapacidad.</u></p>	
<p>ARTÍCULO 5. Modifíquese el artículo 28 de la ley 909 de 2004, el cual quedara así.</p> <p>ARTÍCULO 28. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL INGRESO Y EL ASCENSO A LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios:</p> <p>a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos;</p> <p>b. <u>Accesibilidad universal y compensación de desventajas. El Estado garantizará el acceso y participación a personas con discapacidad en la administración pública en términos de igualdad real a las personas que por condiciones físicas o</u></p>	<p>Se incorpora modificaciones al artículo 28 de la ley 909 de 2004, incorporando dentro de los principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de la carrera administrativa, la garantía de protección real a la garantía de igualdad y el establecimiento de medidas diferenciales en favor de personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su acceso real al empleo público y el reconocimiento de las habilidades propias de estos segmentos poblacionales.</p>

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p><u>sociales deban afrontar mayores barreras de acceso y establecerá medidas diferenciales tendientes a garantizar la compensación de desventajas frente a otros participantes, para lo que se deberá reconocer las habilidades y potencialidades propias de cada una de ellas.</u></p> <p>c) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole. <u>En todos los casos será admisible el establecimiento de medidas diferenciales tendientes a garantizar la superación de barreras de acceso a la carrera administrativa, en favor de personas con discapacidad.</u></p> <p>d) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales;</p> <p>e) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección;</p> <p>f) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección;</p> <p>g) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los</p>	

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p>procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de ejecutarlos;</p> <p>h) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera;</p> <p>i) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al perfil del empleo;</p> <p>j) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección.</p>	
<p>ARTÍCULO 6. Modifíquese el artículo 29 de la ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 de la ley 1960 de 2019, el cual quedara así.</p> <p>ARTÍCULO 29. Concursos. La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos, y de ascenso, <u>independientes abiertos e independientes para ascensos de personas con discapacidad</u>, los cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función.</p> <p>En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán participar las</p>	<p>Se modifica el artículo 29 de la ley 909 de 2004, incorporando al ordenamiento jurídico vigente los concursos independientes de acceso y de ascenso, en búsqueda de garantizar de mejor forma el acceso real de personas con discapacidad al empleo público.</p> <p>En este sentido, se establece la necesidad de realizar concursos independientes, en los que se oferte por lo menos el diez por ciento (10%) de los empleos</p>

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p>personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el desempeño de los empleos.</p> <p><u>En los procesos de selección o concursos independientes de concurso abierto o independientes para ascensos de personas con discapacidad podrán participar las personas que acrediten una discapacidad y los requisitos para el desempeño del empleo público, como medida afirmativa para promover la participación de personas con discapacidad en el sector público.</u></p> <p>El concurso de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos.</p> <p>El concurso será de ascenso cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, las plantas de personal del sector administrativo, o cuadro funcional de empleos, en los niveles asesor, profesional, técnico o asistencial. 2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los sistemas específicos o especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso. 	<p>públicos de los cargos ofertados a través de concursos abiertos o concursos de ascenso.</p> <p>En el mismo sentido, se establece que por lo menos el treinta por ciento (30%) de los cargos ofertados en estos concursos deberán ser cerrados a personas con discapacidad intelectual o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.</p>



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p>3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso es igual o superior al número de empleos a proveer.</p> <p>Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso el treinta <u>por ciento</u> (30%) de las vacantes a proveer. El setenta <u>por ciento</u> (70%) de las vacantes restantes se proveerán a través de concurso abierto de ingreso. <u>En todos los casos se garantizará que el diez por ciento (10%) sobre los cargos a proveer a través de concursos de ascensos, como el diez por ciento (10%) de los cargos a proveer por vía de concursos abiertos, se solventarán a través de concurso independiente para personas con discapacidad.</u></p> <p>Si en el desarrollo del concurso de ascenso <u>o independiente de personas con discapacidad</u> no se inscribe un número igual de servidores con derechos de carrera por empleo convocado, <u>o personas con discapacidad</u>, el concurso se declarará desierto y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso abierto. Quienes se hayan inscrito inicialmente para el concurso de ascenso <u>o personas con discapacidad</u> continuaran en el concurso abierto de ingresos sin requerir una nueva inscripción.</p> <p>PARÁGRAFO 1. La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el término máximo de seis (6)</p>	

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p>meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el procedimiento para que las entidades y organismos reporten la Oferta Pública de Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso <u>e independiente para personas con discapacidad</u> regulado en el presente artículo.</p> <p><u>PARÁGRAFO 2.</u> <u>Para efectos de los concursos independientes para personas con discapacidad a que refiere el presente artículo, se garantizará que siquiera el treinta por ciento (30%) de los cargos ofertados, sean cerrados a personas con discapacidad intelectual o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.</u></p>	
<p>ARTÍCULO 7. EXENCIÓN EN EL PAGO DE TAZA POR CONCEPTO DE DERECHOS DE EXAMEN. Las personas con discapacidad objeto de la presente ley, estarán exentas del pago de las tasas derivadas de los exámenes tendientes a determinar la idoneidad personal para la provisión de las vacantes ofertadas en la convocatoria.</p> <p>El Gobierno Nacional propenderá por la extensión universal de este beneficio a la totalidad de convocatorias que realice la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p>	<p>Con el mencionado artículo se establece la exención en el pago del denominado “Pin de inscripción”, en búsqueda de evitar que la ausencia de recursos económicos se constituya en barrera de acceso al régimen de carrera administrativa. Es importante mencionar que en la misma iniciativa se incorpora una disposición que plantearía el propender por la eliminación de dicho costo en la totalidad de las convocatorias, mandato que cumpliría con el requisito de unidad de materia, esto si se tiene</p>

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
	<p>de presente que si bien es cierto, que la iniciativa legislativa busca como medida principal la inclusión de personas con discapacidad el objeto no limita la posibilidad de propender por la eliminación de barreras de acceso a otros segmentos poblacionales, como sería el mencionado caso.</p>
<p>ARTÍCULO 8. ACREDITACIÓN DE LA DISCAPACIDAD. La Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad del orden nacional por ella delegada, de conformidad con el artículo 7 de la ley 909 de 2004, determinará los requisitos de acreditación de la existencia de la discapacidad, así como de las particularidades de la misma.</p>	<p>Con el mencionado artículo se propende por establecer una facultad de la Comisión Nacional del Servicio Civil para determinar los requisitos que deberán acreditar las personas con discapacidad que deseen participar en el concurso independiente previsto por la norma.</p>
<p>ARTÍCULO 9. ADAPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. En la totalidad de convocatorias, orientadas a la provisión de cargos de carrera administrativa, se establecerán las adaptaciones y ajustes razonables que resulten necesarios, sin afectar el sentido de la prueba, tendientes a garantizar la igualdad real de oportunidades entre los</p>	<p>Establece un mandato en el sentido de realizar ajustes razonables a las pruebas de los concursos, con el fin de garantizar la igualdad real entre los concursantes.</p>

PRECEPTO NORMATIVO PROPUESTO.	OBJETO DEL CONTENIDO ENUNCIADO.
<p>concurantes, independiente a la existencia o ausencia de discapacidad.</p>	
<p>ARTÍCULO 10. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente a la Ley 909 de 2004, a la ley 1960 de 2019 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.</p>	<p>Establece la vigencia inmediata de la norma, con las respectivas derogatoria taxativa y general de algunas normas.</p>

5. IMPACTO FISCAL.

Con relación al impacto fiscal del presente Proyecto de ley nos remitimos a la Jurisprudencia del primer nivel hermenéutico en materia constitucional; la Honorable Corte Constitucional que en Sentencia C-625 de 2010 con ponencia del Honorable Magistrado Nilson Pinilla, en la cual estableció que,

Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819/03 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas. El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso.

Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático.

Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez el Congreso ha valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la política económica trazada por el Gobierno. Así, si el Ejecutivo considera que las cámaras han efectuado un análisis de impacto fiscal erróneo, corresponde al citado Ministerio el deber de concurrir al procedimiento legislativo, en aras de ilustrar al Congreso sobre las consecuencias económicas del proyecto. El artículo 7º de la Ley 819/03 no puede interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso legislativo afecte la validez constitucional del trámite respectivo.

Como lo ha resaltado la Corte, si bien compete a los miembros del Congreso la responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede implicar para el erario público, es claro que es el Poder Ejecutivo, y al interior de aquél el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros del órgano legislativo la inviabilidad financiera de la propuesta que se estudia.

De allí que esta corporación haya señalado que corresponde al Gobierno el esfuerzo de llevar a los legisladores a la convicción de que el proyecto por ellos propuesto no debe ser aprobado, y que en caso de resultar infructuoso ese empeño, ello no constituye razón suficiente para tener por incumplido el indicado requisito, en caso de que las cámaras finalmente decidan aprobar la iniciativa cuestionada.”

Dicho esto, es importante aclarar que, para el cumplimiento de los postulados planteados por este proyecto de ley, en su gran mayoría no requeriría de nuevas disposiciones presupuestales en cuanto no se exige de modificaciones institucionales o de esfuerzos presupuestales, salvo los costos de financiación de los costos de inscripción de personas con discapacidad, que corresponden a garantías de derechos fundamentales de personas con discapacidad, que bien podrían ser asumidos por el Estado sin impactar de manera significativa los costos de operación de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

6. BIBLIOGRAFÍA

Morales., G. D. (15 de Marzo de 2021). *Medio, Empleo & Compensación*. Obtenido de El modelo social de discapacidad: aplicación en Colombia: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/civil-y-familia/el-modelo-social-de-discapacidad-aplicacion-en-colombia>

Palacios., A. (2008). *“El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”*. Madrid: CINCA.

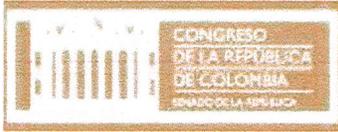
7. CONSIDERACIONES FINALES.

El Estado Colombiano incorporó a su ordenamiento jurídico el modelo social de discapacidad, el cual tal y como lo ha indicado la Honorable Corte Constitucional, en sentencias referidas previamente en esta ponencia, parte del reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad; tesis fundamental principalmente en el principio superior de dignidad humana que parte del reconocimiento de la persona como un fin y no como un medio; así como del reconocimiento de que la discapacidad es generada por factores sociales y estructurales que deben ser modificados para garantizar que esta población goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones.

En este sentido, este modelo involucra a los diferentes actores sociales como estatales en el establecimiento de condiciones que permitan superar esos factores sociales y estructurales que se han constituido en barreras de acceso, en el presente caso, al Empleo Público. Responsabilidad social y estatal en la que se propone a esta corporación legislativa avanzar, a través del establecimiento de medidas afirmativas frente al segmento poblacional de personas con discapacidad, a través de esta iniciativa legislativa.

Iniciativa legislativa que avanzará en la garantía de especial protección frente a personas con discapacidad y la materialización del Estado constitucional, social y democrático de derecho en la vida de la población con discapacidad y sus familias. Estamos seguros de que este Congreso de la República atendiendo a su responsabilidad histórica acogerá en su integralidad esta iniciativa legislativa, la cual conduce a promover, garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad que han encontrado en la contribución al Estado a través del empleo pública una manera de materializar su proyecto de vida.

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

De las Honorables y los Honorables Congressistas,


LAURA ESTER FORTICH SÁNCHEZ
Senadora de la República
Partido Liberal


Honorable Congressista
Claudia Pérez G.


MANUEL VIRGÚEZ PIRAQUIVE
Senador de la República
Partido MIRA


CARLOS EDUARDO GUEVARA
Senador de la República
Partido MIRA

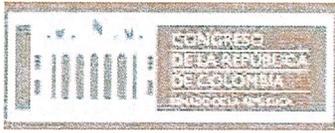

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO
Senador de la República
Partido Liberal


ANA PAOLA AGUDELO
Senadora de la República
Partido MIRA


CESAR CRISTIAN GÓMEZ CASTRO.
Representante a la Cámara.


DOLCEY OSCAR TORRES ROMERO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

JUAN FELIPE LEMOS URIBE
Senador de la República
Partido de la U

NADIA BLEL SCAFF
Senadora de la República
Partido Conservador

IRMA LUZ HERRERA RODRIGUEZ
Representante a la Cámara por Bogotá
Partido Político MIRA

EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA
Honorable Senador de la República
Partido conservador Colombiano

SOLEDAD TAMAYO TAMAYO
Honorable Senadora de la República
Partido conservador Colombiano

Honorable Congreso

SILVIO CARRASQUILLA

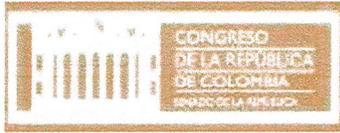
Honorable Congreso

Honorable Congreso

RITE

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso

Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co



Laura Fortich Sánchez
H. Senadora

Honorable Congresista

JORJA ROS CECILIA
COLOMBIA JUSTA LIBRE

Honorable Congresista

Honorable Congresista

Honorable Congresista

Carrera 7 No. 8 - 68 Oficina 315 Edificio Nuevo del Congreso
Teléfono: 57 (1) 3823345 / 46 - laura.fortich@senado.gov.co